



DEL PLAN DE LARGO PLAZO A UNA ESTRATEGIA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO

Honduras ha logrado mantener, durante distintos períodos, una relativa estabilidad en sus principales variables macroeconómicas, sin que ello se haya traducido en una transformación profunda de la estructura productiva, una elevación sostenida de la productividad o una ampliación significativa del empleo formal.

La pregunta de fondo, por tanto, no es si el país puede alcanzar estabilidad, sino cómo convertirla en una base efectiva para el desarrollo, esto exige decidir qué tipo de economía quiere construir Honduras y avanzar hacia un modelo capaz de generar mayor productividad, diversificar su estructura productiva, crear empleos formales y de calidad, y traducir el crecimiento en mejores condiciones de vida para la población.

Este boletín da continuidad al ***Boletín Oficial de la UNAH No. 079 Honduras sin un Plan de Nación vigente: por qué las políticas de Estado de largo plazo deciden el desarrollo económico y social***, que planteó la necesidad de recuperar una visión nacional de largo plazo; y que avanza hacia una pregunta distinta, pero complementaria, **¿qué transformación económica debe sostener esa ruta de país?**

Este documento no constituye un plan alternativo ni sustituye el proceso de formulación que corresponde al Consejo del Plan de Nación con participación de los distintos sectores del país; ofrece, más bien, insumos técnicos para esa discusión nacional, en el marco del Convenio suscrito en julio de 2025 entre la Secretaría de Desarrollo Económico, ocho universidades, el Consejo Hondureño de la Empresa

Privada (COHEP) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), con acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para formular la Política Industrial y el Programa Alianza País, cuyas mesas de trabajo se reanudan. La oficialización de ese Programa en febrero de 2026 muestra que un acuerdo amplio puede sostenerse a través de un cambio de administración.

El problema no es solo cuánto se crece, sino cómo se crece

Durante más de tres décadas, el país orientó su política económica hacia la apertura comercial, la disciplina macroeconómica, la liberalización de mercados y los incentivos a la inversión. Ese enfoque contribuyó a preservar el equilibrio en variables como la inflación y el tipo de cambio, pero no generó, por sí solo, una transformación suficiente de la base productiva del país.

La economía hondureña continúa dependiendo de actividades de bajo o moderado valor agregado, de una elevada informalidad laboral y de un consumo sostenido en buena medida por las remesas, de modo que una parte importante del ingreso de los hogares no proviene de una expansión equivalente de la capacidad productiva interna. El desafío consiste en pasar de una economía que compite principalmente por costos, exoneraciones fiscales o salarios relativamente bajos a otra que lo haga por



productividad, conocimiento, innovación, calidad y capacidad de generar valor dentro del país.

Frente a estas limitaciones, la literatura contemporánea sobre desarrollo productivo sostiene que la transformación productiva requiere mercados dinámicos e instituciones públicas capaces de coordinar inversión, formación, infraestructura, financiamiento e innovación alrededor de objetivos verificables (Ocampo, 2011).

Esa coordinación es necesaria porque el problema de fondo no es que los precios estén distorsionados, sino que en el país conviven dos economías: un segmento reducido de alta productividad y una base extensa de actividades que absorbe la mayor parte del empleo con baja tecnología e ingresos limitados. A esa coexistencia se le denomina heterogeneidad estructural, y es el punto de partida de las orientaciones que plantea este boletín.

Es imprescindible considerar que estas no derivan de la adhesión a una escuela de pensamiento ni excluyen otras lecturas posibles, sino que recogen la convergencia reciente de diagnósticos y recomendaciones de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Europea y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que describen a la región atrapada en una trampa de baja productividad y empleo formal insuficiente y plantean la necesidad de políticas de desarrollo productivo que combinen instrumentos horizontales y sectoriales, fortalezcan capacidades locales, renueven el papel de la banca de desarrollo y articulen de manera explícita al sector público, la empresa privada, la academia y la sociedad civil en torno a sectores y proyectos estratégicos.

Una economía estable, pero con fragilidades que persisten

Los datos recientes muestran una paradoja: estabilidad en las principales variables macroeconómicas junto a problemas estructurales que limitan el bienestar de la población.

Cuadro 1. Indicadores macroeconómicos y sociales de Honduras, 2025-2026

Indicador	Situación reciente
Crecimiento del PIB real	3.6% en 2025; proyección de 3.0% a 4.0% para 2026*
Inflación interanual	6.20% a agosto de 2026; cierre proyectado de 4.5% a 5.5%**
Remesas familiares	US\$12,297.3 millones en 2025; representando más del 25% del PIB
Pobreza	Alrededor del 60.1% de la población; una de las más altas de Centroamérica
Informalidad laboral	Más del 70% de la población ocupada.
Desigualdad	El ingreso de los hogares de mayores ingresos equivale a cerca de 101 veces el de los hogares de menores ingresos
Tipo de cambio	L27.02 por dólar en agosto de 2026; depreciación acumulada de 1.88%
Deuda pública	Superior a US\$ 18,000 millones

Fuente: IIES-UNAH con datos del Banco Central de Honduras (2026), el Instituto Nacional de Estadística (2025), la Secretaría de Finanzas (2026).

*Estimación BCH. **Estimación UNAH.

Detrás de estas cifras existen cuatro rasgos que explican por qué la estabilidad macroeconómica no se ha traducido en una transformación equivalente de las condiciones de vida de la población.



El primero es que Honduras es una economía de consumo sostenida por remesas familiares, las cuales financian las necesidades de los hogares y una parte considerable de la demanda de divisas del país, lo que estabiliza el corto plazo, pero desacopla el ingreso nacional de la capacidad productiva interna y genera vulnerabilidad frente a cambios en la política migratoria de los países receptores.

El segundo, es que a esa dependencia se suma la heterogeneidad estructural del mercado laboral, visible en una informalidad que supera el 70% de la población ocupada; en estas condiciones, el crecimiento del producto no se traduce en empleo protegido ni en una ampliación de la base contributiva de la seguridad social y del fisco, lo que limita directamente los recursos disponibles para atender las carencias que reflejan indicadores como la pobreza o la desigualdad.

El tercero es que la especialización exportadora de bajo valor agregado agrava esta situación, dado que productos como el café, aceite de palma, banano, camarón y maquila textil concentran la oferta exportable del país, actividades sensibles a los precios internacionales, a la volatilidad climática y a decisiones de política comercial externa, con escasos encadenamientos hacia proveedores nacionales que permitan multiplicar sus beneficios dentro de la economía interna.

Por último, la restricción fiscal e institucional cierra este círculo, ya que Honduras mantiene una carga tributaria dependiente en gran medida de impuestos indirectos, un gasto tributario elevado por exoneraciones y un servicio de deuda creciente

reducen el espacio para la inversión pública, que constituye el instrumento central de cualquier estrategia de transformación productiva.

A esto se suman las pérdidas del sector eléctrico, la vulnerabilidad climática y los déficits de infraestructura logística, factores que elevan el costo de producir dentro del país.

Ejes económicos a intervenir

Los cuatro rasgos estructurales no pueden atenderse mediante medidas aisladas, dado que responden a una misma configuración productiva. En este sentido, se proponen seis ejes de intervención que se sustentan en su capacidad de modificar la estructura productiva del país y no únicamente su nivel de actividad.

Honduras ya avanza en tres de ellos a través de instrumentos en formulación como la Política Industrial, la Estrategia Nacional de Comercialización Agrícola y el Programa Alianza País. Este boletín contribuye a ese proceso al proponer criterios de diseño para dichos instrumentos y llamar la atención sobre los ámbitos que todavía no alcanzan.

Al mismo tiempo, subraya que la estrategia debe tener un anclaje territorial apoyado en la evidencia que aportan los 298 perfiles sociodemográficos municipales elaborados por la UNAH, los cuales muestran brechas significativas de productividad y de acceso a servicios entre municipios, de modo que cada eje requiere instrumentos diferenciados según las condiciones de cada territorio.

Cuadro 2: Ejes de intervención para la transformación productiva de Honduras

Eje	Problema estructural	Objetivo de la intervención
1. Transformación productiva y diversificación	Especialización primario-exportadora y maquila de bajo valor agregado.	Escalar hacia agroindustria, manufactura de mayor contenido tecnológico y servicios exportables.
2. Soberanía y seguridad alimentaria	Dependencia de importación de granos básicos y baja productividad campesina.	Elevar la productividad de la pequeña y mediana producción y estabilizar el abastecimiento nacional.
3. Empleo digno y formalización	Informalidad superior al 70% y subocupación persistente.	Ampliar el empleo formal, la cobertura de la seguridad social y la productividad del trabajo.
4. Financiamiento del desarrollo	Crédito concentrado en consumo y comercio; escaso crédito productivo de largo plazo.	Orientar el ahorro nacional y las remesas hacia inversión productiva.
5. Política fiscal progresiva	Predominio de impuestos indirectos y alto gasto tributario.	Aumentar y hacer progresiva la recaudación para financiar inversión pública.
6. Energía, infraestructura y transición verde	Costos energéticos elevados, pérdidas del sistema y vulnerabilidad climática.	Reducir el costo sistémico de producir y aumentar la resiliencia territorial.

Fuente: IIES-UNAH.

Estrategias de corto, mediano y largo plazo

El paso del diagnóstico a la acción exige distinguir qué puede hacerse de inmediato y qué requiere acumular capacidades e instituciones. Con ese propósito, las orientaciones de política se organizan en tres horizontes temporales.

Corto plazo (0 a 24 meses): estabilización con orientación productiva

- Reorientar el crédito público de primer y segundo piso hacia la micro, pequeña y mediana empresa mediante fondos de garantía recíproca y tasas diferenciadas para actividades transables.
- Establecer un sistema de compras públicas con preferencia para la producción nacional, con reglas de transparencia y trazabilidad verificables.
- Reformar el régimen de exoneraciones fiscales: evaluación costo-beneficio, condicionamiento a

metas verificables de empleo formal, inversión y encadenamiento local, y eliminación de incentivos sin contrapartida.

- Ejecutar un programa de emergencia de productividad agroalimentaria: asistencia técnica, semilla mejorada, riego de pequeña escala, silos y centros de acopio, con precios de garantía para granos básicos.
- Fortalecer la estadística pública y crear un tablero nacional de indicadores de cambio estructural bajo coordinación del INE, el BCH y la academia.

Mediano plazo (2 a 5 años): construcción de capacidades

- Fortalecer e institucionalizar el Comité de Coordinación Interinstitucional ya constituido en el marco del Convenio de 2025, dotándolo de mandato formal, presupuesto y continuidad más allá del período de gobierno, para concertar



prioridades sectoriales con, el Estado, la empresa privada, las organizaciones de trabajadores y la academia.

- Diseñar políticas sectoriales selectivas para cadenas con potencial demostrado como la agroindustria de café y cacao con valor agregado, manufactura ligera vinculada a la maquila, textiles con diseño propio, turismo sostenible y servicios digitales.
- Reformar la banca de desarrollo para financiar inversión de largo plazo, mediante instrumentos que canalicen una fracción del ahorro proveniente de remesas hacia proyectos productivos y de vivienda.
- Articular la formación técnica y universitaria con la demanda de las cadenas priorizadas, mediante el INFOP, la UNAH y los institutos tecnológicos regionales.
- Impulsar una reforma tributaria progresiva orientada a elevar la participación de los impuestos directos y a reducir la evasión y elusión, con reglas claras y estables para la inversión.
- Ampliar la generación de energía renovable, reducir las pérdidas del sistema eléctrico y desarrollar los parques eco-industriales previstos en el Programa Alianza País conforme al marco internacional de la ONUDI, el Banco Mundial y la GIZ, que es un estándar de desempeño ambiental, social y económico y no un régimen jurídico especial, de modo que los incentivos queden ligados a resultados verificables.

Largo plazo (5 a 15 años): cambio estructural y equidad

- Consolidar un sistema nacional de innovación que articule universidades, centros tecnológicos y empresas mediante mecanismos concretos de vinculación como los centros de innovación

conjuntos, investigación por contrato y formación dual, con una inversión en investigación y desarrollo creciente como proporción del PIB.

- Transitar de una inserción internacional basada en costos laborales bajos a otra sustentada en productividad, calidad y diferenciación de productos.
- Universalizar la protección social contributiva y no contributiva, desligando el acceso a la seguridad social de la condición formal del empleo.
- Ejecutar un programa nacional de infraestructura logística y de ordenamiento territorial con criterios de adaptación climática.
- Reducir de manera sostenida la brecha de productividad entre sectores y regiones, como indicador síntesis del avance de la estrategia.

La experiencia comparada en América Latina indica que las estrategias orientadas al cambio estructural enfrentan sus principales dificultades en la etapa de implementación más que en el diseño de sus instrumentos. Sobre esa base, se somete a la consideración de la opinión pública lo siguiente:

1. **Priorizar un número acotado de cadenas productivas y de instrumentos de política,** someterlos a evaluación y escalarlos conforme a sus resultados, en lugar de dispersar recursos en múltiples programas simultáneos.
2. **Dotar a las agencias ejecutoras de personal calificado, presupuesto plurianual y marcos normativos que trasciendan el ciclo político,** de modo que la implementación no dependa de decisiones discrecionales de corto plazo.



3. **Sujetar todo apoyo público como el crédito subsidiado, exoneraciones, compras estatales, al cumplimiento de metas verificables y establecer mecanismos claros de sanción ante el incumplimiento.**
 4. **Mantener espacios permanentes de diálogo entre Estado, sector privado, organizaciones de trabajadores, cooperativas y academia, garantizando acceso público a la información relevante para la toma de decisiones.**
 5. **Preservar la sostenibilidad fiscal y de la deuda, evitando expansiones del gasto sin fuentes de financiamiento estables que puedan comprometer la viabilidad de la estrategia en el tiempo.**
 6. **Someter periódicamente cada instrumento a evaluación externa, utilizando indicadores de productividad, empleo formal, exportaciones y equidad, y hacer públicos sus resultados.**
 7. **Publicar en formato abierto los beneficiarios de incentivos y de contratos públicos, como condición para legitimar un papel más activo del Estado en la orientación del desarrollo.**
- Ninguna de estas medidas depende de un solo actor, porque la estructura productiva solo cambia cuando el Estado orienta, la empresa invierte, el sistema financiero acompaña, la academia genera conocimiento y la ciudadanía vigila, como muestra el cuadro siguiente al ordenar esa división de tareas.

Cuadro 3. Actores involucrados y responsabilidades en la estrategia de desarrollo productivo.

Actor	Responsabilidad principal en la estrategia
Poder Ejecutivo (SEFIN, SDE, SAG, SEDESOL, Secretaría de Trabajo)	Formulación, coordinación y ejecución de la política económica y sectorial; alineación del presupuesto con las prioridades del cambio estructural.
Congreso Nacional	Aprobación de las reformas tributarias, laboral y de incentivos; asignación presupuestaria plurianual y control político.
Banco Central de Honduras	Política monetaria y cambiaria compatible con un tipo de cambio real competitivo y con el financiamiento de la inversión.
Banca de desarrollo y sistema financiero (BANHPROVI, banca privada, cooperativas)	Provisión de crédito de largo plazo, garantías e instrumentos para la MIPYME y la economía social.
Sector privado empresarial (COHEP, cámaras, gremios sectoriales)	Inversión productiva, adopción tecnológica, formalización del empleo y cumplimiento de las metas asociadas a los incentivos.
Organizaciones de trabajadores y cooperativas	Negociación de condiciones laborales, participación en la formación técnica y en el seguimiento de los acuerdos.
UNAH y sistema de educación superior	Investigación aplicada, formación de capacidades, vinculación universidad-empresa y generación de evidencia para el debate público.
INE y sistema estadístico nacional	Producción oportuna de estadísticas de empleo, pobreza, productividad y estructura productiva.



Actor	Responsabilidad principal en la estrategia
Gobiernos locales y mancomunidades	Ordenamiento territorial, infraestructura local y articulación de cadenas productivas regionales.
Organismos internacionales y cooperación	Financiamiento, asistencia técnica y transferencia tecnológica, en el marco de las prioridades definidas por el país.
Sociedad civil y organizaciones territoriales	Contraloría social, participación en la definición de prioridades y vigilancia de la transparencia.

Fuente: IIES-UNAH.

No se trata de cerrar la economía ni de sustituir al mercado por el Estado, sino de construir deliberadamente lo que un mercado pequeño y abierto no genera por sí solo, es decir, talento calificado, infraestructura, financiamiento de largo plazo y capacidad de innovar. Para Honduras esto significa pasar de una economía sostenida en las remesas y en el bajo costo a otra sustentada en lo que produce y en el empleo que genera.

La experiencia de otros países enseña que estas políticas fracasan cuando los apoyos públicos quedan capturados por unos pocos, cuando se apuesta a sectores sin potencial real o cuando se comprometen recursos que después no existen (Leiva, 2008; Rodrik, 2011). Esas advertencias no invalidan el camino, sino que indican cómo recorrerlo y, por eso, las recomendaciones anteriores insisten en metas verificables, evaluación periódica, información pública y responsabilidad fiscal; por la misma razón, varias de las orientaciones planteadas, en particular las tributarias, se ofrecen como alternativas abiertas a discusión, cuyo acuerdo debe construirse y no imponerse.

Honduras no parte de cero, dado que cuenta con una Visión de País vigente, con un proceso de construcción de la Política Industrial ya en marcha y con una generación mejor formada que cualquiera

anterior. Lo que falta no es diagnóstico, sino es un acuerdo que ordene los esfuerzos y sobreviva a los cambios de gobierno; la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reitera su compromiso de aportar a ese acuerdo con investigación, formación de capacidades y vinculación entre la academia y el aparato productivo, y renueva el llamado a construir, con todos los sectores, el Plan de Nación que la ley ordena y que el país todavía está a tiempo de cumplir.

Bibliografía

- Banco Central de Honduras. (2026). Programa Monetario 2026-2027. BCH.
- Banco Central de Honduras. (2026). Informes de coyuntura económica y estadísticas de remesas familiares. BCH.
- Banco Mundial. (2026). Honduras: panorama general. Grupo Banco Mundial.
- Bielschowsky, R. (2009). Sesenta años de la CEPAL: estructuralismo y neoestructuralismo. Revista de la CEPAL, 97, 173-194.
- CEPAL. (1990). Transformación productiva con equidad: la tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa. Naciones Unidas.
- CEPAL. (2024). Panorama de las políticas de desarrollo productivo en América Latina y el Caribe 2024. Naciones Unidas, CEPAL.
- CEPAL. (2025). Panorama de las políticas de desarrollo productivo en América Latina y el Caribe 2025. Naciones Unidas, CEPAL.
- CEPAL, OCDE, Comisión Europea y CAF. (2025). Perspectivas económicas de América Latina 2025: Impulsando y financiando la transformación productiva. Naciones Unidas, CEPAL.
- Fajnzylber, F. (1990). Industrialización en América Latina: de la «caja negra» al «casillero vacío». Cuadernos de la CEPAL, 60. Naciones Unidas.
- Instituto Nacional de Estadística. (2025). Indicadores de pobreza y mercado laboral 2025. INE.
- Ocampo, J. A. (2011). Macroeconomía para el desarrollo: políticas anticíclicas y transformación productiva. Revista de la CEPAL, 104, 7-35.
- Prebisch, R. (1949). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. CEPAL.
- Rodrik, D. (2011). Una economía, muchas recetas: la globalización, las instituciones y el crecimiento económico. Fondo de Cultura Económica.
- Secretaría de Finanzas. (2026). Estrategia para la Reducción de la Pobreza. SEFIN.
- Sunkel, O. (ed.). (1991). El desarrollo desde dentro: un enfoque neoestructuralista para América Latina. Fondo de Cultura Económica.
- Universidad Nacional Autónoma de Honduras. (2025). VIII Encuesta de Economía Familiar Multipropósitos. UNAH.